



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DON JOSE GIMENEZ CERVANTES, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión N° 08/03 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 27 de febrero de 2003, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la:

RESOLUCION POR LA QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR TELEFONICA DE ESPAÑA, S.AU CONTRA LA RESOLUCION DE LA CMT DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2002 RESPECTO A LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA AL CONCURSO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.

En relación con el recurso potestativo de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 7 de noviembre de 2002 respecto a la oferta económica presentada al concurso convocado por el Ayuntamiento de Pontevedra para la adjudicación del servicio de telefonía fija, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. 08/03 del día de la fecha, la siguiente Resolución:

Resolución de 27 de febrero de 2003, recaída en el expediente AJ 2002/7974

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 7 de noviembre de 2002, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dictó Resolución en el procedimiento abierto a instancias de R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (en adelante RCable) denunciando la propuesta económica presentada por Telefónica de España, SAU (en adelante Telefónica) en el concurso público convocado por el Ayuntamiento de Pontevedra para la prestación de servicios de telefonía fija.

En la citada Resolución la Comisión acordó lo siguiente:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRIMERO.- TELEFÓNICA, en el caso de resultar adjudicataria del citado Concurso, deberá regularizar, en los términos recogidos en la presente resolución, la facturación que presente al Ayuntamiento, de acuerdo con el régimen de regulación de precios vigente en cada momento. Esta interpretación de la oferta de TESAU resulta pues necesaria para la adecuación al régimen de precios regulados de la cláusula de Actualización analizada.

SEGUNDO.- TELEFÓNICA debe respetar en sus ofertas el principio de transparencia establecido en el régimen de regulación de precios vigente. En concreto, cuando la oferta no se limite a reproducir las tarifas vigentes en el catálogo de precios regulados del momento en que se presentan y relación de los planes de descuento que resulten de aplicación, TELEFÓNICA incluirá en las ofertas las previsiones y estimaciones tenidas en cuenta para su realización. En todo caso, TELEFÓNICA recordará en sus ofertas a los clientes que los precios ofertados están sujetos a las variaciones que correspondan en el futuro de acuerdo con la regulación de precios vigente.

TERCERO.- TELEFÓNICA deberá atender aquellas solicitudes técnicamente viables y debidamente justificadas de acceso especial a la red que le sean presentadas, ateniéndose a lo estipulado en el Reglamento de Interconexión y en los Principios de Actuación sobre el tratamiento de las solicitudes de Accesos Especiales aprobados por esta Comisión.

En este sentido, deberá atender, en las condiciones señaladas en el párrafo precedente, las solicitudes de Acceso Especial Remoto Ibercom que le sean presentadas."

SEGUNDO.- Con fecha 13 de diciembre de 2002 y entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en la misma fecha, Telefónica presenta escrito por el que interpone recurso de reposición contra la Resolución de la CMT de 7 de noviembre por los siguientes motivos:

Primero.- Incompetencia de la CMT para interferir en la adjudicación de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Pontevedra para la adjudicación del servicio de telefonía fija.

Segundo.- La imposición a Telefónica de sujetar su propuesta técnica a la normativa reguladora de los accesos especiales resulta contraria al artículo 7 del Reglamento de Interconexión, puesto que no se trata de un acceso especial y porque, en todo caso, la propuesta técnica es replicable tanto técnica como económicamente.

Tercero.- La obligación de Telefónica de prestar un acceso especial en los términos reflejados en el Acuerdo Tercero no se ajusta a derecho.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Cuarto.- No existe estrechamiento de márgenes por la aplicación de un precio superior al establecido por la CMT para la prestación del acceso especial remoto Ibercom.

A los anteriores Antecedentes de Hecho les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Fundamentos jurídicos procedimentales.

Primero.- Competencia y plazo para resolver.

La competencia para resolver el presente recurso corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado. El presente recurso deberá ser resuelto y su resolución notificada en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su interposición, según lo establecido en el artículo 117.2 de la misma Ley.

Segundo.- Admisión a trámite y delimitación del objeto del recurso.

La Resolución de la CMT de 7 de noviembre de 2002 pone fin a la vía administrativa por lo que es recurrible en reposición de acuerdo con el artículo 116 de la LRJPAC. En la medida en que Telefónica alega la manifiesta incompetencia de la Comisión para adoptar la resolución y la vulneración del ordenamiento jurídico, está invocando causa de nulidad o anulabilidad prevista en los artículo 62 y 63 de la misma Ley, conforme requiere el artículo 107.

Por todo ello, el recurso ha sido interpuesto cumpliendo con todos los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la LRJPAC. Asimismo, se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 117 de la misma Ley. Teniendo en cuenta lo anterior, se admitió a trámite el recurso interpuesto.

B. Fundamentos jurídicos materiales.

Primero.- En cuanto a la alegación de incompetencia de la Comisión para interferir en la adjudicación de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Pontevedra para la adjudicación del servicio de telefonía fija.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Defiende Telefónica que la Comisión no puede, en el ejercicio de sus funciones, entender acerca de un concurso convocado por un Ayuntamiento y así, so pretexto del ejercicio de competencias en materia de vigilancia de la debida aplicación de los precios, interferir en el ejercicio de las competencias que la Ley y la Constitución reconocen a los Ayuntamientos sobre contratación administrativa.

En relación con este motivo de impugnación cabe precisar que si bien la Resolución aborda en su fundamento de derecho primero un breve análisis del contenido del pliego desde el punto de vista de su incidencia en la libre competencia, el mismo se hace a título de comentario y así en el Resuelve la Comisión no se pronuncia sobre el procedimiento de contratación seguido por el Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra sino únicamente sobre el contenido de la oferta presentada por Telefónica. De la lectura de la parte dispositiva de la Resolución impugnada se desvela con toda claridad que el Consejo se limita a dictar determinadas condiciones comerciales que Telefónica deberá respetar en su Oferta comercial en cumplimiento del régimen de regulación de precios que le es de aplicación y de las reglas de la libre competencia.

Se trata, pues, de una Resolución dirigida a Telefónica en cuanto que operador de telecomunicaciones, en ejercicio de las funciones que la Ley 12/1997 de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones atribuye a la Comisión en desempeño de su objeto de salvaguarda de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. En el marco de este objeto se atribuye a la Comisión la competencia para vigilar la debida aplicación de las tarifas por los operadores (art. 1.Dos.2.h), para velar por la libre competencia en el mercado, equilibrando en su caso las situaciones discriminatorias y adoptando a ambos efectos las resoluciones que procedan (art.1.Dos.2.c), así como para adoptar las medidas necesarias para asegurar la pluralidad de la oferta de servicios, el acceso a las redes de telecomunicaciones por los operadores, la interconexión de redes y el suministro de red en condiciones de red abierta y la política de precios y comercialización por los operadores de servicios (art.1.Dos.2.f).

Por cuanto antecede, debe desestimarse el primer motivo alegado por Telefónica puesto que la CMT ha actuado lícitamente en ejercicio de las competencias a ella atribuidas por la Ley 12/1997 de Liberalización de las Telecomunicaciones.

Segundo.- En cuanto a la imposición a Telefónica de la obligación de sujetar su propuesta técnica a la normativa reguladora de los accesos especiales y la conformidad a derecho de la Resolución con el artículo 7 del Reglamento de Interconexión.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Concretamente Telefónica se está refiriendo al Acuerdo Tercero de la Resolución impugnada donde se dice que *"TELEFÓNICA deberá atender aquellas solicitudes técnicamente viables y debidamente justificadas de acceso especial a la red que le sean presentadas, ateniéndose a lo estipulado en el Reglamento de Interconexión y en los Principios de Actuación sobre el tratamiento de las solicitudes de Accesos Especiales aprobados por esta Comisión. ... En este sentido, deberá atender, en las condiciones señaladas en el párrafo precedente, las solicitudes de Acceso Especial Remoto Ibercom que le sean presentadas."*

a) Defiende Telefónica que, aunque se denominen igual, el acceso especial remoto Ibercom no es un acceso especial en el sentido previsto en el artículo 7 del Reglamento de Interconexión, motivo por el cual no está obligada a ofrecer el acceso en los términos anteriormente citados.

Esta afirmación se contradice totalmente con la oferta presentada por Telefónica que repetidamente califica su servicio como acceso especial. Así en el capítulo VI, página 1 de la Oferta se dice expresamente " Telefónica.... propone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.6 del RIN la constitución de una red corporativa que interconecte las diversas dependencias del Concello de Pontevedra, mediante la utilización de accesos especiales con las equivalencias técnico funcionales que a continuación se exponen". A su vez en el capítulo VI página 8, 10 y 26, al presentar las tarifas del servicio medido las justifica con referencia al artículo 7.6 del Reglamento de Interconexión aprobado por Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio que desarrolla la Ley 11/1998 de 24 de abril General de Telecomunicaciones.

Este artículo 7.6 del Reglamento de Interconexión que invoca Telefónica regula las condiciones de los accesos especiales a redes públicas telefónicas fijas para los prestadores de servicios de grupos cerrados de usuarios.

De acuerdo con la calificación de la propia Telefónica, esta Comisión, en la resolución recurrida vino a entender que se trataba de un acceso especial y declaró que, en consecuencia, Telefónica debía atender las solicitudes de acceso especial remoto Ibercom que le fueran presentadas en las condiciones que el Reglamento de Interconexión dispone para los accesos especiales.

Ahora bien, como quiera que Telefónica, en el presente recurso de reposición, alega que el servicio ofertado bajo su propia denominación de acceso especial remoto Ibercom no constituye un acceso especial propiamente dicho, es preciso entrar a analizar la aplicación del concepto de acceso especial, tanto a los servicios que Telefónica ofrece al Ayuntamiento de Pontevedra como a las solicitudes de acceso que un operador de Telecomunicaciones como RCable pudiera dirigirle con objeto de poder prestar un servicio equivalente.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Pues bien, nuestro ordenamiento jurídico entiende por acceso especial "el que se lleva a cabo en puntos distintos de los de terminación ofrecidos con carácter general a los usuarios finales" (artículo 7.1 del Reglamento de Interconexión). A su vez se dice en el artículo 7.6 citado por Telefónica que los accesos especiales a redes públicas telefónicas fijas para los prestadores de servicios de grupos cerrados de usuarios, se someterán a las mismas condiciones en las que se suministran a cualquier otro prestador de servicios de telecomunicaciones. No obstante, tanto en la determinación de las condiciones de los accesos especiales como en las tarifas que se apliquen se tomará en consideración la importancia de la red y de los servicios propios del grupo cerrado de usuarios y la circunstancia de que esta pueda estar integrada por una administración pública o cualquiera de sus entes públicos, en cuyo caso, los accesos especiales deberán suministrarse de forma preferente y podrán incluir condiciones específicas en atención al interés público

De lo expuesto se deduce que, efectivamente, el artículo 7.6 no está contemplando el servicio de acceso remoto Ibercom que Telefónica oferta al Ayuntamiento de Pontevedra, sino más concretamente un acceso especial a las redes públicas telefónicas fijas para los prestadores de servicios de grupos cerrados de usuarios. El artículo 7.6 regula las condiciones que Telefónica debería aplicar a otro operador que le solicitase un acceso especial para prestar servicios de grupo cerrado de usuarios a un tercero. En este sentido, Telefónica utiliza incorrectamente en su oferta al Ayuntamiento de Pontevedra la referencia al artículo 7.6 del Reglamento de Interconexión, pues Telefónica lo aplica a una oferta de un servicio minorista.

Tampoco parece que el servicio de acceso remoto Ibercom ofertado por Telefónica al Ayuntamiento de Pontevedra pueda ser considerado estrictamente como acceso especial a los efectos del artículo 7.1 del Reglamento de Interconexión.

De acuerdo con este, el acceso especial es aquel que se lleva a cabo en puntos de terminación de red distintos de los ofrecidos a la generalidad de los usuarios finales. La Ley General de Telecomunicaciones define el punto de terminación de la red como *"conjunto de conexiones físicas o radioeléctricas y sus especificaciones técnicas de acceso, que forman parte de la red pública y que son necesarias para tener acceso a esta y a los servicios que la utilizan como soporte. El punto de terminación de red es aquel en que se terminan las obligaciones de los operadores de redes y servicios y al que pueden conectarse los equipos terminales de telecomunicaciones."*

De acuerdo con esta definición, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha entendido, entre otras, en su resolución de 29 de octubre de 1998 que *"el concepto de acceso especial, según nuestra legislación nace estrechamente vinculado al concepto de punto de terminación"*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

de red, el cual se caracteriza por incluir un conjunto de conexión físicas o radioeléctricas y sus especificaciones técnicas; esto es viene definido por sus aspectos técnicos, excluyendo los aspectos económicos o comerciales como definitorios del acceso especial".

En definitiva, conforme a las conclusiones anteriores, si Telefónica no está ofreciendo al Ayuntamiento de Pontevedra un acceso distinto técnicamente, en cuanto al punto de terminación de red, del que ofrece a la generalidad de los usuarios finales y que, a mayor abundamiento, forma parte de su oferta comercial, no puede hablarse en este caso propiamente de un acceso especial.

Hasta aquí se ha analizado la oferta de Telefónica al Ayuntamiento, esto es un servicio minorista. Ahora bien, es preciso analizar, por otra parte, si Telefónica vendría obligada a ofrecer acceso (mayorista) a sus elementos de red a un prestador de servicios de telecomunicaciones (que en este caso sería RCable) para que éste pudiera prestar el servicio equivalente al de Ibercom remoto ofrecido por Telefónica y si, en su caso, este acceso podría calificarse de acceso especial o no, así como las consecuencias de una u otra calificación.

El término acceso, tal y como se usa en las Directivas ONP, que dan origen a la vigente legislación, significa hacer accesible algunas partes de una red existente para su uso por un tercer operador, de forma que éste puede ofrecer sus servicios a los clientes que dependen de esa red, pero no implica cambio de propiedad de los elementos de la red. La interconexión es una forma de acceso, como también lo es el acceso de usuario final en los puntos de terminación de red habituales y el acceso especial.¹ Estas formas de acceso no agotan el término de acceso y así, se deduce de la Nota explicativa de la DG Sociedad de la Información de 17 de septiembre de 1999 donde se explica que bajo las Directivas 97/33/CE y 98/10/CE las autoridades nacionales de reglamentación tienen la facultad de garantizar formas de acceso específicas y de determinar sus términos y condiciones (en este caso se contemplaba la posibilidad de permitir el acceso al bucle de abonado-antes de que el mismo fuese regulado expresamente en su propio Reglamento- y de operadores móviles virtuales). Posteriores documentos de la Comisión Europea califican de acceso especial a determinadas modalidades de acceso al bucle de abonado

¹ En el nuevo marco de directivas que deben transponerse, todavía no en vigor, cambia sustancialmente la definición de acceso que se entiende como "puesta a disposición de otra empresa en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas" y la interconexión pasa a entenderse más claramente como un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas: "conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por una misma empresa o por otra distinta de manera que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra distinta o acceder a los servicios prestados por otra empresa". (Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión).



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

como puede ser el acceso compartido (Documento de trabajo DG Sociedad de la Información de 9 de febrero de 2000) y el acceso indirecto (Comunicación de la Comisión de 26 de abril de 2000) pero no al acceso totalmente desagregado.

La Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) dispone en su artículo 4.2 que los organismos autorizados a suministrar redes públicas de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en el Anexo I que tengan un peso significativo en el mercado deberán satisfacer todas las solicitudes razonables de conexión a la red, incluso en puntos distintos de los de terminación de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios. En su considerando 6 explica que esta figura se crea con la finalidad de "favorecer el desarrollo de nuevos tipos de servicios de telecomunicación".

De lo anterior se deduce que existe una obligación del operador dominante de atender todas las solicitudes de acceso, en el sentido de conexión a la red, incluso en los casos en que el acceso se produzca en puntos distintos a los ofrecidos a la mayoría de los usuarios.

La Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de Febrero de 1998, sobre aplicación de la Oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo que tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1, la armonización de las condiciones para un acceso y una utilización abiertos y eficaces de las redes públicas de telefonía fija y de los servicios públicos de telefonía fija en el marco de unos mercados abiertos y competitivos de conformidad con los principios de la oferta de red abierta (ONP), especifica lo que se entiende por acceso especial en el ámbito de la telefonía vocal. Así, en el artículo 16 regula la obligación de los organismos que tienen un peso significativo en el mercado de atender las solicitudes razonables de acceso a la red pública de telefonía fija en puntos distintos de los suministrados normalmente (entendiendo por tales los descritos en la parte 1 del Anexo II que menciona el interfaz de línea única, interfaz multilínea, interfaz de marcación directa de extensiones DDI y cualesquiera otras interfaces suministradas normalmente) formuladas por organismos que presten servicios de telecomunicaciones. La obligación de proveer acceso especial únicamente podrá ser limitada en casos concretos, cuando existan alternativas técnica y comercialmente viables al acceso especial solicitado y siempre y cuando el acceso solicitado sea adecuado en relación con los recursos disponibles para atender la solicitud.

La incorporación de ambas Directivas a nuestro ordenamiento jurídico distingue lo siguiente: En primer lugar, una obligación general de ofrecer acceso recogida en el artículo 24.1 párrafo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones y en el



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

6 del Reglamento de Interconexión; y; En segundo lugar, la obligación de proveer acceso especial recogida en los artículos 24.1 párrafo 2 de la Ley y 7 del Reglamento.

Así, según el artículo 24.1 párrafo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones *"Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones que tengan la consideración de dominantes deberán facilitar el acceso a sus redes en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias a todos los usuarios y prestadores de servicios que lo soliciten"*.

El 6 del Reglamento de Interconexión dispone por su parte que *"Las condiciones de acceso a las redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público, deberán fundarse en los principios generales de objetividad, transparencia, proporcionalidad y no discriminación...No se podrá limitar el acceso, excepto cuando esté justificado en el respeto a los requisitos esenciales o en los supuestos a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 7 de este reglamento"*.

El servicio de extensión Ibercom remota ofrecido al Ayuntamiento de Pontevedra, tal como es definido por Telefónica, es proporcionado por conexiones físicas (servicio de puro cableado), sin elementos activos, y con capacidad de transporte de la banda vocal.

Teniendo en cuenta que Telefónica está prestando este servicio minorista y que los operadores precisan del acceso a elementos de su red para poder prestar un servicio equivalente, existe una obligación, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, de proveer acceso, acceso que Telefónica debe conceder en condiciones no discriminatorias, es decir, no distintas de las que se presta a sí misma o a terceros.

Efectivamente, para poder prestar un servicio similar, como se analiza en el apartado siguiente un prestador de servicios precisaría de un acceso a elementos de la red de Telefónica. Estos elementos pueden formar parte de la oferta comercial normalizada de telefónica (servicios OIR, OBA o alquiler de circuitos, tec) o tratarse de un acceso especial o de una combinación de unos y otros.

En cualquier caso la conclusión es la misma, pues Telefónica está obligada a atender las solicitudes de acceso a elementos de su red para la prestación de un servicio ibercom remoto por terceros en condiciones objetivas, transparentes, proporcionales y no discriminatorias, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Interconexión. Asimismo, en los casos en que técnicamente se precise un acceso especial, Telefónica está obligada a atenderla de acuerdo en los términos del artículo 7 del Reglamento de Interconexión.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En todo caso, en el supuesto de no llegar a un acuerdo con los operadores que soliciten el acceso, la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones será competente para dictar las condiciones concretas del acuerdo de acceso.

Cabe precisar que la Resolución recurrida se limita a declarar la existencia de una obligación genérica recogida en los artículos 6 y 7 del Reglamento de Interconexión y no tiene como objeto resolver un conflicto de acceso concreto provocado por una negativa de Telefónica a una solicitud de acceso.

En el caso de que se plantease dicho conflicto ante la Comisión, ésta evaluaría, además de la existencia de alternativas técnicas y económicas al servicio solicitado, si la solicitud de acceso que se presente es técnicamente viable y adecuada en relación con los recursos disponibles para atender la solicitud.

b) Por otra parte, alega Telefónica que aún en el caso de tratarse de un acceso especial no existiría obligación de ofrecerlo puesto que los operadores disponen de alternativas.

El artículo 7 del Reglamento de Interconexión dispone que los titulares de redes públicas de telecomunicaciones que tengan la consideración de dominantes deberán atender las solicitudes técnicamente viables y debidamente justificadas de acceso especial a la red entendiendo por acceso especial el que se lleva a cabo en puntos distintos de los de terminación ofrecidos con carácter general a los usuarios finales.

Asimismo en el artículo 7, 1 párrafo segundo, se dice que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá limitar la obligación de proveer accesos especiales en casos concretos, cuando resulten inadecuados en relación con los recursos disponibles para atender la solicitud y existan alternativas técnica y comercialmente viables.

Esta misma previsión es de aplicación, según el artículo 6 del Reglamento de Interconexión, a un acceso que no pueda calificarse de "especial", lo que significa que la obligación de proveer acceso únicamente puede ser limitada por los mismos motivos.

Es decir, la obligación de proveer el acceso existe en ambos casos para los operadores dominantes, pero la Comisión, podrá limitar la obligación por inadecuación o por existir alternativas técnicas o comercialmente viables.

No hay pues infracción del ordenamiento jurídico en el presente caso, pues la Comisión, ha entendido y explicado adecuadamente en la resolución



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

impugnada que no existían alternativas técnica y comercialmente viables, a la vista de datos obrantes en el expediente.

Telefónica ofrece ahora en el recurso de reposición datos diferentes de los aportados en el procedimiento que dio lugar a la Resolución de referencia. Sin embargo estos datos no contradicen las conclusiones alcanzadas en la Resolución recurrida, como se verá a continuación:

b.1) Circuitos analógicos

En primer lugar, en la resolución recurrida la Comisión descartó la posibilidad de ofrecer este mismo servicio a través de circuitos analógicos sobre la base de que esta solución limitaría *"el ámbito a extensiones analógicas exclusivamente, lo que impediría a RCable ofrecer determinadas funcionalidades en las líneas instaladas en las dependencias remotas- como por ejemplo la identificación del número llamante*. Frente a esto Telefónica afirma ahora que se trata de un servicio de puro cableado por lo que no se garantizan extensiones digitales (página 10 del recurso).

Sin embargo esta afirmación contradice lo dispuesto en la página 4 de su Oferta al Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra en la que expresamente sostiene que *"todas las dependencias tienen servicio telefónico con las mismas características y funcionalidades disponibles para los usuarios independientemente de si disponen o no de nodo en el inmueble"*. Por ello, con independencia de si Telefónica está o no en condiciones de cumplir su propuesta al Ayuntamiento de Pontevedra, lo cierto es que si RCable quiere prestar un servicio equivalente al ofertado ha de poder ofrecer la misma funcionalidad que oferta Telefónica, lo cual no puede realizarse con el servicio de mero cableado a que se refiere Telefónica en su recurso.

b.2) Recurso a elementos OBA

En cuanto a la existencia de otras alternativas, plantea Telefónica en el recurso de reposición, como documentación confidencial, una serie de escenarios en los que, según su parecer, sí que existirían alternativas técnicas y económicas al acceso. Así, Telefónica presenta en su escrito un análisis de replicabilidad de su oferta al Ayuntamiento de Pontevedra basándose en la utilización por parte de RCable de los servicios OBA de prolongación de par totalmente desagregado para cada una de las líneas existentes en las dependencias distantes, y de Tendido de Cableado Externo (TCE), para bloques de 100 pares y en la modalidad de arqueta propiedad de Telefónica.

Así, y dependiendo del lugar donde se encuentre el Repartidor del Operador (RdO) analiza dos posibles escenarios:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Escenario 1. Utilización exclusiva de elementos mayoristas de Telefónica

Consistiría en la terminación en las dependencias del Ayuntamiento donde se encuentran las centralitas (Casa Consistorial y Policía Local). La longitud del TCE vendría dada por la distancia existente entre las centrales locales, a las que estarían conectadas las líneas de las dependencias remotas, y las dependencias donde se ubican las centralitas.

Escenario 2. Utilización parcial de elementos mayoristas de Telefónica

Consistiría en la terminación en ubicación distante al RdO dentro de su red. Se supone, dada la capilaridad de la red de Rcable en Pontevedra, como distancia máxima entre la central local y el Rdo la que se corresponde al límite de calidad garantizado del TCE según lo estipulado en la OBA, esto es, 150 metros. Asimismo, para este escenario se han incorporado dos posibilidades de repercusión de los costes del TCE:

- 2.1. Suponiendo que se repercuten todos los costes del bloque de 100 pares a los bucles utilizados (soportando los costes de subaditividad).
- 2.2. Suponiendo que únicamente se repercuten los costes proporcionales (lo que lleva implícita una hipótesis de llenado del 100%).

En las tablas que se presentan a continuación se detallan, por un lado, los precios de los servicios ofrecidos por Telefónica al Ayuntamiento de Pontevedra y, por otro lado, los costes que debería soportar un operador que quisiera replicar tales servicios²:

Servicio Ofertado	Servicio OBA asimilable
Acceso Especial Remoto	Prolongación de Par totalmente desagregado
Cableado externo + Mantenimiento línea sin equipo	Tendido de Cable Externo (TCE)

² El total de precios y costes aquí presentados se corresponde con el periodo de duración del Contrato con el Ayuntamiento, esto es, 24 meses.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Coste OBA Operador (euros)			
	Prolongación de Par	TCE Escenario 1	
Número de Lineas	67	CT Peregrina	CT Xunqueira
Distancia al RdO (metros)	-	529	655
Alta	20,00	11.095,92	13.720,50
Mensualidad	12,62	97,72	120,40
Total Mensual	845,54	2.345,28	2.889,60
Total Coste por servicio OBA	21.632,96	13.441,20	16.610,10
Total Escenario (prolongación par + TCE)		51.684,26	

	Prolongación de Par	TCE Escenario 2.1	
Número de Lineas	67	CT Peregrina	CT Xunqueira
Distancia al RdO (metros)	-	150	150
Alta	20,00	3.201,35	3.201,35
Mensualidad	12,62	29,50	29,50
Total Mensual	845,54	708,00	708,00
Total Coste por servicio OBA	21.632,96	3.909,35	3.909,35
Total Escenario (prolongación par + TCE con subaditividad)		24.428,80	

	Prolongación de Par	TCE Escenario 2.2	
Número de Lineas	67	CT Peregrina	CT Xunqueira
Distancia al RdO (metros)	-	150	150
Alta	20,00	3.201,35	3.201,35
Mensualidad	12,62	29,50	29,50
Total Mensual	845,54	708,00	708,00
Total Coste por servicio OBA	21.632,96	3.909,35	3.909,35
Total Escenario (prolongación par + TCE sin subaditividad)		6.528,61	

A partir de los resultados anteriores, y para cada uno de los escenarios considerados, se podría afirmar que un operador que contratase los servicios mayoristas anteriormente especificados estaría en disposición de poder replicar la oferta presentada por Telefónica al Ayuntamiento de Pontevedra. El margen que obtendría en cada caso sería:

Ahora bien, estos resultados del análisis de replicabilidad, sobre la base de los supuestos utilizados por Telefónica, deben someterse a las siguientes matizaciones:

1ª) Consideración previa: El Precio ofertado por Telefónica por el servicio de Cableado Externo no está desglosado en su oferta.

Telefónica alega en su escrito a la CMT que el precio del Cableado Externo asciende a euros, tal y como viene indicado en el epígrafe 7.4 de la Oferta



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Económica –Costes de Integración- hecho que, según Telefónica, no fue contemplado por esta Comisión en la resolución ahora recurrida.

A este respecto, resulta de interés señalar lo indicado en el epígrafe 7.4 de la Oferta de Telefónica, apartado donde se incluyen costes asociados a la puesta en marcha de la red propuesta no asociables a un servicio concreto.

De la tabla anterior se deduce que los Costes de Integración ascienden a un total de euros, entre los cuales, entendemos que se encontraría el coste del Cableado Externo euros). Como se puede comprobar, **dicho coste no aparece desglosado para cada uno de los conceptos que lo integran**, de modo que no resulta posible inferir qué precio ofrece Telefónica al Ayuntamiento en concepto de Cableado Externo. Sin embargo, a efectos de realizar el análisis de replicabilidad, se ha aceptado el precio que Telefónica establece en sus alegaciones.

2) Debe descartarse un análisis de replicabilidad según Escenarios 2.1 y 2.2

Telefónica presenta en sus alegaciones dos escenarios (2.1 y 2.2) en los que analiza la posibilidad por parte de RCable de replicar los servicios ofertados al Ayuntamiento de Pontevedra teniendo en cuenta “la capilaridad de la red” de este operador, lo que implicaría la terminación del Tendido de Cableado Externo dentro de su red y no en las dependencias del Ayuntamiento: RCable extendería su cableado desde su red, donde estén ubicados los Rdo, hasta las Centralitas (De terminar en las dependencias del Ayuntamiento todos los servicios serían prestados por Telefónica, lo que nos situaría en el escenario 1).

Bajo dicho supuesto, es importante señalar que los costes en los que incurriría RCable para replicar los servicios ofertados por Telefónica no serían solamente los derivados de la utilización de los servicios contenidos en la OBA, (únicos contemplados por Telefónica en el escenario presentado ante la CMT). Se deben tener en cuenta asimismo, además de los presentados por Telefónica, los costes de todos aquellos elementos necesarios para completar una infraestructura que posibilite la prestación de un servicio equivalente al de Telefónica.

Estos costes, no contemplados por Telefónica, serían al menos los siguientes

- Coste de habilitar una sala de operador en una ubicación próxima -menos de 150 metros- para cada una de las centrales locales de las que dependen los bucles de las dependencias remotas del Ayuntamiento.

RCable incurriría necesariamente en los costes de alquiler y/o compra de una dependencia próxima a cada central donde instalar el RdO, dado que la



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

desagregación de los bucles de abonado sólo puede llevarse a cabo bajo la modalidad de coubicación distante. (La Central Local de Xunqueira, por sus características, no permite la coubicación en sala de Telefónica).

- Coste del cableado desde la sala de operador a las sedes del Ayuntamiento donde se encuentran ubicadas las centralitas IBERCOM.

Por consiguiente, el análisis de replicabilidad llevado a cabo por Telefónica bajo los Escenarios 2.1 y 2.2 sería incompleto, dado que no se han tenido en cuenta todos los costes en los que incurriría RCable para emular la oferta de Telefónica.

3) Análisis de replicabilidad según el Escenario 1:

Como ya se ha explicado anteriormente, los servicios ofertados por Telefónica al Ayuntamiento de Pontevedra, tal y como se deduce de sus alegaciones, podrían ser replicados mediante la contratación de diversos servicios mayoristas incluidos en la OBA (prolongación de par y TCE).

Desde un punto de vista estrictamente económico, los resultados del análisis de replicabilidad llevado a cabo por Telefónica, según los supuestos del Escenario 1, permiten a este operador afirmar que es posible emular la oferta presentada al Ayuntamiento de Pontevedra. Así, un operador alternativo que ofreciera un servicio equivalente a un precio final idéntico al ofertado por Telefónica, obtendría un margen razonable entre el coste de los servicios mayoristas contratados y dicho precio.

En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis de replicabilidad según el Escenario 1:

Ahora bien, desde un punto de vista técnico, no parece factible replicar la oferta de Telefónica recurriendo a los servicios de la OBA. Y esto así porque el TCE que conectaría las centrales locales con sus respectivas dependencias supera ampliamente la distancia máxima recomendada por la OBA para asegurar la calidad de los servicios prestados sobre dicho TCE, esto es, la longitud de 150 metros. Tal y como describe Telefónica, el TCE sería de 655 metros, entre la centralita de la Policía Local y la Central de Xunqueira, y de 529 metros, entre la centralita de la Casa Consistorial y la Central de Peregrina.³

³ No deja de sorprender que esta limitación del TCE se haya tenido en cuenta por parte de TELEFÓNICA en los Escenarios 2.1 y 2.2 y que, por el contrario, a pesar de que el servicio mayorista contratado en el Escenario 1 es el mismo –el TCE–, tal limitación no sea contemplada como un impedimento técnico de cara a replicar el servicio.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por consiguiente, cabe concluir que los resultados del análisis realizado por Telefónica bajo los supuestos del Escenario 1 no serían tampoco válidos, dado que desde un punto de vista técnico no es posible replicar los servicios ofrecidos por Telefónica debido a la necesidad de tender una infraestructura física –distinta al TCE y, por tanto, no contemplada en la OBA- que permita asegurar la calidad en la prestación de los servicios que deben replicarse.

En conclusión, cabe desestimar también este motivo de impugnación, puesto que la Resolución impugnada ha demostrado correctamente que los operadores no disponen de alternativas para poder prestar un servicio equivalente al prestado por Telefónica. Ante esta ausencia de alternativas técnica y económicamente viables se mantiene la obligación inicial de Telefónica de ofrecer el acceso sin que proceda limitarla de acuerdo con lo expuesto en los artículos 6 y 7 del Reglamento de Interconexión.

Ahora bien, como se ha explicado en apartados precedentes, una vez se haya solicitado el acceso a Telefónica por RCable (sea este o no especial), Telefónica podría denegar la solicitud por no ser técnicamente viable o ser inadecuada en relación con los recursos disponibles para atender la solicitud, aspectos estos que corresponderá determinar a la Comisión en caso de conflicto.

Tercero.- Sobre las necesarias matizaciones en cuanto a la obligación de prestación de accesos especiales por parte de Telefónica.

Telefónica realiza en este punto una serie de matizaciones respecto a la obligación que tienen los operadores dominantes de suministrar el acceso a terceros según las normas del derecho la competencia y que entiende que la CMT no ha analizado suficientemente ni ha aplicado correctamente.

En relación con esta cuestión es preciso destacar que la obligación de facilitar acceso a las redes si bien deriva de un principio del derecho de la competencia, ha sido recogida en términos similares pero no idénticos en la regulación sectorial (es decir en la Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento de Interconexión, entre otras) y ello implica un tratamiento significativamente distinto, puesto que no es preciso realizar un análisis de mercado y del posible abuso en el caso por caso para que pueda imponerse una obligación de ofrecer acceso al operador dominante. Es decir, no se trata de la imposición de una obligación en aplicación del derecho de la competencia sino de la existencia de una obligación en virtud de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Interconexión y en los mismos términos que los mismos disponen. Otra cosa será que en el margen de interpretación que permite la aplicación de la norma, la Comisión deba acudir, como es lógico a las fuentes y principios del derecho de la competencia que han inspirado esta legislación



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

sectorial que surgió con la pretensión de liberalizar y abrir un mercado donde antes sólo existía un monopolio.

Así, nuestro ordenamiento jurídico sectorial de telecomunicaciones recoge la obligación de proveer el acceso especial en las condiciones de Oferta de Red Abierta (ORA o ONP) que se estimaron necesarias a nivel comunitario (en las directivas anteriormente citadas) y que se transpusieron en la Ley y en el Reglamento de Interconexión para aquellos operadores que tengan la consideración de dominantes a los efectos de la regulación sectorial (en este caso Telefónica).

Por su parte, la Resolución recurrida no viene a dictar las condiciones concretas en las que Telefónica deberá ofrecer acceso sino que se limita a reproducir expresamente el contenido del párrafo 1 del artículo 7 y declararlo aplicable al supuesto de hecho contemplado.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el acceso contemplado en la Resolución, según los nuevos datos aportados por la recurrente no debe calificarse restrictivamente como acceso especial sino como de acceso en el sentido del artículo 24.1 párrafo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones y del artículo 6 del Reglamento de Interconexión, es necesario modificar el Acuerdo tercero de manera que recoja la obligación de Telefónica de atender tanto las solicitudes de accesos especiales como las solicitudes de acceso conforme a los principios de objetividad, transparencia, proporcionalidad y no discriminación, según disponen dichos artículos.

Por último, cabe precisar que el principio de no discriminación obliga al operador dominante a dar acceso a terceros a su red en condiciones equiparables a las que se presta a su misma o a sus filiales. La directiva 97/33/CE, antes citada, introduce el concepto en su artículo 7 en relación la interconexión de redes y así dispone que *"con referencia a la interconexión a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios de telecomunicación accesibles al público..... a) los organismos afectados se atengan al principio de no discriminación con respecto a la interconexión que ofrezcan a los demás. Deberán aplicar condiciones similares en circunstancias similares a los organismos interconectados que presten servicios similares y proporcionar medios e información relacionados con la interconexión a los demás en las mismas condiciones y de la misma calidad en que los proporcionan para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados."* Por su parte el Reglamento de Interconexión en su artículo 9 recoge similar interpretación del principio de no discriminación.

El principio de no discriminación significa, por tanto, (entre otras cosas) que Telefónica debe aplicar a los operadores que presten servicios similares y que



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

soliciten el acceso, condiciones similares en circunstancias similares a las que proporcionan para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados.

Ahora bien, al hilo de este razonamiento, se ha de concluir que el precio que Telefónica puede aplicar por el acceso a los elementos de red que sean necesarios para prestar el servicio de Ibercom remoto, en principio, no podría ser nunca superior al precio minorista que ella misma oferta al Ayuntamiento, pues de lo contrario estaría aplicando a terceros un precio superior del que se aplica a sí misma, ya que se da por supuesto que no está vendiendo a pérdida ni existen subvenciones cruzadas que implicarían la aplicación de un precio que no cubriese los costes reales, conductas ambas prohibidas por el derecho de la competencia.

De ahí que pueda mantenerse la precisión que se hace en la Resolución recurrida de que el denominado "acceso especial remoto ibercom" debe ser prestado por Telefónica a operadores de telecomunicaciones por un precio igual o inferior a Euros, cantidad que incluye los Euros mensuales más la cuota de alta prorrateada por cuatro años y que se identifica con el precio minorista ofrecido al Ayuntamiento.

Cuarto.- Un precio superior al establecido por la CMT para la prestación del acceso especial remoto Ibercom no evidenciaría un estrechamiento de márgenes.

Sostiene Telefónica en este motivo de impugnación que la Comisión no ha demostrado correctamente, desde la perspectiva del derecho de la competencia, la existencia de una práctica de abuso de posición de dominio consistente en un estrechamiento de márgenes anticompetitivo.

Frente a este motivo de impugnación es preciso poner de manifiesto que la Resolución recurrida no está imputando a Telefónica la realización de ninguna práctica anticompetitiva que requiera el análisis a que se refiere la recurrente.

La resolución recurrida únicamente viene a concretar, a modo de indicación, el precio máximo que, según sus estimaciones, podría considerarse razonable exigir a un operador de telecomunicaciones por un acceso que le permita prestar un servicio minorista equivalente al ofrecido por Telefónica en su oferta al Ayuntamiento de Pontevedra, teniendo en cuenta que el mismo debe ser proporcionado con la misma calidad y en condiciones análogas a las que aplican a sus propios servicios.

En consecuencia, la resolución recurrida ni es susceptible de interpretarse en el sentido que pretende la recurrente, ni adolece, en consecuencia, de las carencias de análisis de las que se le acusa, motivo por el cual debe ser rechazada la alegación.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por otra parte, en cuanto a la alegación de que la CMT no ha tenido en cuenta la partida de "costes de integración" en su análisis de replicabilidad (pagina 10 del recurso) hay que indicar que esta Comisión no ha hecho sino valorar los datos contenidos en la Oferta económica de Telefónica al Ayuntamiento. Así, teniendo en cuenta que el capítulo 7 de la Oferta, en relación con los costes de integración incluye, además de la instalación del nuevo cableado otros conceptos como *"puentes en repartidores, gastos generales, anuncios en prensa, ingeniería y dirección de obra"*, sin el suficiente desglose, y ante la imposibilidad de separar los relativos a la instalación de nuevo cableado, ha tomado como referencia el precio final ofrecido al Ayuntamiento.

Por último, cabe precisar que el precio de Euros fijado por la Comisión, y contrariamente a lo alegado por Telefónica, incorpora la cuota de alta, de manera prorrateada al periodo de amortización considerado por Telefónica en su oferta económica, esto es, 4 años.

Vistos los citados hechos y fundamentos jurídicos, esta Comisión

ACUERDA

Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU contra Resolución de esta Comisión de fecha 7 de noviembre de 2002 suprimiendo del Acuerdo Tercera el parrafo " ... *En este sentido, deberá atender, en las condiciones señaladas en el párrafo precedente, las solicitudes de Acceso Especial Remoto Ibercom que le sean presentadas*" que queda sustituido por el siguiente:

Además Telefónica deberá atender las solicitudes de acceso a los elementos de red que le sean presentadas para prestar un servicio minorista equiparable al por ella denominado "acceso especial remoto Ibercom" conforme a los principios de objetividad, transparencia, proporcionalidad y no discriminación.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Contra la presente resolución que resuelve un recurso potestativo de reposición, no puede interponerse de nuevo dicho recurso de reposición. No obstante, contra el mismo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.ocho de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Carlos Bustelo García del Real

José Giménez Cervantes



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. Reinaldo Rodríguez Illera, D. José Pascual González Rodríguez y D. Antonio Elías Fuste, en su calidad de Consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y en relación con

El acuerdo del Consejo por el que se resuelve el:

RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CMT DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2002 RESPECTO A LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA AL CONCURSO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (EXP. AJ2002/7974).

adoptado en la Sesión nº 08/03 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el 27 de febrero de 2003,

consideran necesario emitir el siguiente

VOTO PARTICULAR

Exposición.

En relación con lo establecido en el punto "7. Régimen de precios del contrato" de la pág. 38 y la recomendación correspondiente de la pág. 48, así como la argumentación que sostiene dicha posición, los abajo firmantes se reafirman en lo expuesto en sus votos particulares anteriores emitidos en relación con el expediente MTZ 2001/5774 resuelto mediante medidas cautelares en la sesión 8/02 del 28 de octubre de 2002 y definitivamente en la sesión 36-02 del 17 de octubre del mismo año.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

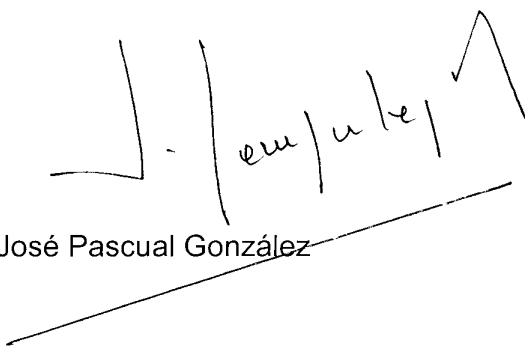
En conclusión:

Los Consejeros firmantes manifiestan por todo lo anterior, su desacuerdo con la resolución adoptada y ruega que así conste a efectos de lo establecido en el art. 22 de la ORDEN de 9 de abril 1997 del Ministro de Fomento por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Madrid, 28 de febrero de 2003


Fdo.: Reinaldo Rodríguez


Antoni Elías


José Pascual González